

Asunto: Respuesta Ciudadana del Folio 310573424000261

Mérida, Yucatán a 16 de octubre de 2024.

C. Marco
Presente.-

Por medio del presente y en atención a su solicitud marcada con el folio número **310573424000261**, de 18 de septiembre de 2024, me permito hacer de su conocimiento que mediante resolución de fecha 16 de octubre del año en curso se determinó lo siguiente:

Primero. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de la presente resolución.

Segundo. De conformidad con los argumentos precisados en los considerandos segundo y tercero, se confirma la declaración de RESERVA realizada por los administradores de los Juzgados Primero y Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, respecto a la información descrita en el inciso c) de la presente resolución.

Tercero. Se instruye a la Unidad de Transparencia a notificar al solicitante la presente resolución, informándole que ésta podrá ser impugnada a través del Recurso de Revisión en los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, con fundamento en el artículo 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Cuarto. Cúmplase. Así lo resolvió y firma el Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con fundamento en los numerales 54, 55 y 56 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.

En tal virtud, y en cumplimiento en lo establecido en el artículo 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjuntan los oficios 9253/2024 y 9267/2024, ambos de 11 de octubre de 2024, firmados por los Administradores de los Juzgados Primero y Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, así como la resolución de 16 de octubre del 2024, emitida por el Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán.

Atendiendo al punto resolutivo tercero, sírvase el presente como vía de notificación para los alcances legales establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente


Licda. Enna del Socorro Amaya Martínez
Encargada de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial



TRANSPARENCIA

Asunto: RESOLUCIÓN DE RESERVA

Mérida, Yucatán, a 16 de octubre de 2024.

Para resolver la solicitud marcada con el folio **310573424000261** que se tuvo por presentada con fecha 18 de septiembre de 2024, se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

a) Que con fecha 18 de septiembre de 2024, se registró en la Plataforma Nacional de Transparencia una solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio **310573424000261**, por medio de la cual fue requerido lo siguiente:

"En relación a la respuesta remitida con motivo de la solicitud marcada con el folio 310573424000230, solicito del listado remitido en los oficios 8157/2024 y 8423, de los juzgados primero y segundo de control del primer distrito judicial, la siguiente información: El nombre completo de cada uno de los jueces de control, que registró, inició, conoció o concluyó cada uno de los procesos listados en dicha respuesta.".(sic)

b) Que mediante oficios UTAI-CJ-725/2024 y UTAI-CJ-726/2024, de 18 de septiembre de 2024, se requirió a los Juzgados Primero y Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, respectivamente, la información solicitada.

c) Que mediante oficios 8737/2024 y 9013, ambos de 24 de septiembre de 2024, los administradores de los Juzgados Primero y Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, solicitaron la ampliación del término para dar contestación, misma que se resolvió mediante resolución e 02 de octubre de 2024, emitida por el Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

d) Que mediante oficios **9253/2024**, de 11 de octubre de 2024, firmado por el administrador del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y **9267/2024**, de 11 de octubre de 2024, firmado por la administradora del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, emitieron sus respuestas, declarando ambos la reserva de información, respecto a los nombres completos de cada uno de los jueces de control que registraron, iniciaron, conocieron o concluyeron cada uno de los procesos enlistados en la respuesta del folio 310573424000230.

e) Que recibidos los oficios de respuesta de los Administradores de los Juzgados Primero y Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, la Unidad de Transparencia de este Órgano los integró al expediente en que se actúa y corrió traslado del mismo a los integrantes del Comité, a efecto de que contaran con los elementos necesarios para el pronunciamiento de la siguiente resolución.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Este Comité Colegiado de Transparencia es competente de conformidad con lo previsto en el artículo 44 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Yucatán, para resolver sobre la clasificación de Reserva de información.

SEGUNDO. Conforme a las consideraciones que anteceden, lo que procede es analizar si las manifestaciones vertidas por los Juzgados Primero y Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se encuentran dentro de los supuestos de información que puede clasificarse como reservada.

A fin de determinar lo anterior, es necesario destacar lo señalado en el artículo 6 apartado A, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 113 fracción V y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los artículos Cuarto y Vigésimo Tercero, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas, que a la letra dicen:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6o. "El derecho a la información será garantizado por el Estado.

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes".

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

"Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;

II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;

III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;

IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal;

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;

X. Afecte los derechos del debido proceso;

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.

Artículo 114. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título."

Por su parte, el ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, establece en los artículos Cuarto y, Vigésimo Tercero respectivamente, lo siguiente:

***Cuarto.** Para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera total o parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley General, en relación con las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley General.*

Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia.

Vigésimo Tercero.

Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.

De lo expuesto y de la normativa referida, se desprende que la divulgación de los nombres completos de cada uno de los jueces de control que registraron, iniciaron, conocieron o concluyeron cada uno de los procesos enlistados en la respuesta del folio 310573424000230, encuadra con lo previsto en la fracción V del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

“Artículo 113 ...

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

De lo anteriormente expresado, resulta evidente que al divulgar los nombres completos de cada uno de los jueces de control que registraron, iniciaron, conocieron o concluyeron cada uno de los procesos enlistados en la respuesta del folio 310573424000230, quienes se encargan de realizar funciones de seguridad pública tales como resolver todos los procesos en materia penal así como de procesos relacionados con los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, se acredita un vínculo entre la persona física y la información que puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud, que en este caso específico se trata de información contenida en las causas penales, pues al hacer públicos dichos datos no solamente atentaría contra la integridad física de los servidores públicos, si no que se pondría en riesgo también la vida de sus familiares, vulnerando con ello su seguridad e integridad personal; esto derivado de que al hacer pública la información relativa a los nombres completos de cada uno de los jueces de control que registraron, iniciaron, conocieron o concluyeron cada uno de los procesos enlistados en la respuesta del folio 310573424000230, se facilita su localización y la posibilidad de repercusiones por parte de gente mal intencionada o delincuentes, que pretendan menoscabar la salud o la vida de los servidores públicos.

Cabe señalar que existen funciones a cargo de servidores públicos que, por la propia naturaleza de su encargo encaminada a combatir a la delincuencia en sus diferentes

manifestaciones, por excepción debe resguardarse su identidad, ya que la divulgación de la información como sus nombres a personas ajenas a los juicios pudiera comprometer la seguridad el estado y obstaculizar la actuación de los servidores públicos, lo cual encuentra sustento en el siguiente criterio de interpretación:

Nombres de servidores públicos dedicados a actividades en materia de seguridad, por excepción pueden considerarse información reservada. De conformidad con el artículo 7, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el nombre de los servidores públicos es información de naturaleza pública. No obstante, lo anterior, el mismo precepto establece la posibilidad de que existan excepciones a las obligaciones ahí establecidas cuando la información actualice algunos de los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley. En este sentido, se debe señalar que existen funciones a cargo de servidores públicos, tendientes a garantizar de manera directa la seguridad nacional y pública, a través de acciones preventivas y correctivas encaminadas a combatir a la delincuencia en sus diferentes manifestaciones. Así, es pertinente señalar que en el artículo 13, fracción I de la ley de referencia se establece que podrá clasificarse aquella información cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional y pública. En este orden de ideas, una de las formas en que la delincuencia puede llegar a poner en riesgo la seguridad del país es precisamente anulando, impidiendo u obstaculizando la actuación de los servidores públicos que realizan funciones de carácter operativo, mediante el conocimiento de dicha situación, por lo que la reserva de la relación de los nombres y las funciones que desempeñan los servidores públicos que prestan sus servicios en áreas de seguridad nacional o pública, puede llegar a constituirse en un componente fundamental en el esfuerzo que realiza el Estado Mexicano para garantizar la seguridad del país en sus diferentes vertientes.

Precedentes:

- Acceso a la información pública. 4548/07. Sesión del 13 de febrero de 2008. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Comisionado Ponente Alonso Gómez-Robledo V.
- Acceso a la información pública. 4130/08. Sesión del 17 de diciembre de 2008. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Policía Federal Preventiva. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal.
- Acceso a la información pública. 4441/08. Sesión del 14 de enero de 2009. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Policía Federal Preventiva. Comisionado Ponente Alonso Gómez-Robledo V.
- Acceso a la información pública. 5235/08. Sesión del 11 de febrero de 2009. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Secretaría de la Defensa Nacional. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal.
- Acceso a la información pública. 2166/09. Sesión del 19 de agosto de 2009. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Secretaría de Seguridad Pública. Comisionado Ponente Juan Pablo Guerrero Amparán.

Es importante resaltar que, la reserva de información respecto al nombre de los jueces de control, no coarta el derecho de los partes en los juicios, ya que las personas involucradas en los mismos, saben y conocen quien es el juzgador que está a cargo de sus procesos, sin embargo, es importante reservar y proteger la identidad de los juzgadores, cuando la información es requerida por terceros ajenos, de los que se desconocen los motivos por los cuales requieren información que si bien es publica, por excepción puede y debe ser reservada, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los juzgadores.

Se afirma lo anterior, pues al configurarse los supuestos previstos en los párrafos que preceden, es permisible clasificar la información como reservada, no sin antes realizar la argumentación fundada y motivada que como sujeto obligado debe realizarse, la cual estará encaminada a acreditar que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla; es decir, es necesario aplicar la prueba de daño.

Prueba de daño.

Bajo este contexto, y en adición a lo anterior, debe mencionarse que de conformidad con lo establecido en los artículos 104, 105 y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con la condición Trigésimo tercero de los Lineamientos Generales, se colige la siguiente prueba de daño y de interés público, que demuestra que la difusión de la presente información representa un riesgo real, riesgo demostrable y riesgo identificable, que se causaría con la difusión de los nombres y apellidos de las personas jueces lo cual se argumenta conforme lo siguiente:

RIESGO REAL:

Con la divulgación de los nombres y apellidos de las personas jueces, se pondría en riesgo la vida, seguridad o salud de los servidores públicos antes citados, debido a la estrecha relación que existe entre sus cargos y sus funciones dentro del sistema de seguridad pública del Estado; hacer públicos dichos datos, no solamente atentaría contra la integridad física de los servidores públicos, si no que se pondría en riesgo también la vida de sus familiares, vulnerando con ello su seguridad e integridad personal, facilitando su localización lo que incrementaría la posibilidad de repercusiones por parte de gente mal intencionada o delincuentes.

RIESGO DEMOSTRABLE:

Se estaría contraviniendo lo que expresamente establecen los artículos 3 y 10 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública que señala que la seguridad pública tiene por objeto proteger los derechos, la integridad física, el patrimonio y el entorno de las personas y preservar y restablecer la paz y el orden público, a través de la sanción de las faltas administrativas y la reinserción social, ya que al divulgar los nombres y apellidos de las personas jueces de los juzgados penales de control que realizan funciones dentro del sistema de seguridad pública del Estado, existe la posibilidad de que la difusión de dicha información los ponga como posibles blancos de extorsiones, amenazas o sobornos, lo que constituiría un grave riesgo para la seguridad del Estado, ya que impediría y obstruiría las funciones que ejerce el Poder Judicial durante la etapa de juicio, lo cual contribuiría en crear un estado de incertidumbre, inseguridad y falta de confianza de la ciudadanía para con las instituciones de gobierno.

RIESGO IDENTIFICABLE:

De hacerse públicos los nombres y apellidos de las personas jueces de los juzgados penales de control que realizan funciones dentro del sistema de seguridad pública del Estado, se estaría afectando el interés general en la procuración de justicia a favor de la sociedad, lo que supera el interés particular de conocer la información.

En razón de lo anterior, el difundir los nombres completos de cada uno de los jueces de control que registraron, iniciaron, conocieron o concluyeron cada uno de los procesos enlistados en la respuesta del folio **310573424000230**, quienes se encargan de realizar funciones de seguridad pública, causaría un serio perjuicio tanto a la integración de los expedientes o causas penales ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal, así como también a la seguridad personal de los servidores públicos.

TERCERO. Los elementos circunstanciales de modo, tiempo y lugar, al difundirse los nombres completos de cada uno de los jueces de control que registraron, iniciaron, conocieron o concluyeron cada uno de los procesos enlistados en la respuesta del folio **310573424000230**, quienes se encargan de realizar funciones de seguridad pública, causaría un Daño Presente, Probable y Específico al interés público, en razón de lo siguiente:

Daño Presente. Riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público. Dar a conocer la información relativa los nombres completos de cada uno de los jueces de control que registraron, iniciaron, conocieron o concluyeron cada uno de los procesos enlistados en la respuesta del folio 310573424000230, quienes se encargan de realizar funciones de seguridad pública, pondría en peligro la integridad física tanto de los servidores públicos como de sus familiares o inclusive del entorno en el que se desempeñan.

Daño Probable. Perjuicio que espera el interés público. Al permitir la divulgación de los nombres completos de cada uno de los jueces de control que registraron, iniciaron, conocieron o concluyeron cada uno de los procesos enlistados en la respuesta del folio **310573424000230**, quienes se encargan de realizar funciones de seguridad pública, se pondría en eminente peligro la seguridad de los servidores públicos que se encargan de calificar de legal las detenciones, de formular la imputación, de vincular a proceso a los imputados, entre otras, ya que existe la posibilidad de que la difusión de dicha información los ponga como posibles blancos de extorsiones, amenazas o de sobornos, lo que constituiría un grave riesgo para la seguridad del Estado, y contribuiría en crear un estado de incertidumbre, inseguridad y falta de confianza de la ciudadanía.

Daño Específico. Principio de Proporcionalidad. El reservar la información relativa a los nombres completos de cada uno de los jueces de control que registraron, iniciaron, conocieron o concluyeron cada uno de los procesos enlistados en la respuesta del folio **310573424000230**, quienes se encargan de realizar funciones de seguridad pública, no es un medio restrictivo de acceso a la información, ya que de entregar dicha información los haría identificables poniendo en inminente riesgo la vida y la integridad de ellos como de sus familiares, por lo tanto, la reserva se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio que es menos restrictivo disponible para evitar un daño o perjuicio mayor.

CUARTO. Con base en los argumentos expuestos, es posible concluir que la información contenida relativa a los nombres completos de cada uno de los jueces de control que registraron, iniciaron, conocieron o concluyeron cada uno de los procesos enlistados en la respuesta del folio **310573424000230**, requiere mantenerse en reserva por un periodo de cinco años o hasta que desaparezca la causa que da su origen a su clasificación.

Por lo expuesto anteriormente, y con fundamento en los artículos 100, 101, 104, 105, 106 fracción II y 113 fracción V, así como a los artículos, Cuarto y Vigésimo Tercero del ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se:

RESUELVE:

Primero. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de la presente resolución.

Segundo. De conformidad con los argumentos precisados en los considerandos segundo y tercero, se confirma la declaración de RESERVA realizada por los administradores de los Juzgados Primero y Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, respecto a la información descrita en el inciso c) de la presente resolución.

Tercero. Se instruye a la Unidad de Transparencia a notificar al solicitante la presente resolución, informándole que ésta podrá ser impugnada a través del Recurso de Revisión en los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, con fundamento en el artículo 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Cuarto. Cúmplase. Así lo resolvió y firma el Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con fundamento en los numerales 54, 55 y 56 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.
G.PONCE.---- J.ESPINOSA.---L.MARÍN.----- RÚBRICAS.


EAM

**JUZGADO PRIMERO DE CONTROL DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO.**



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE YUCATÁN
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Mérida, Yucatán a 11 de octubre de 2024.

OFICIO: 9253/2024.

ASUNTO: SE RINDE INFORMACIÓN.

**A LA C.
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO.
LICDA. ENNA DEL SOCORO AMAYA MARTÍNEZ.
PRESENTE.**

En atención al oficio **UTAI-CJ-725/2024**, de 18 de septiembre de 2024, mediante el cual hace del conocimiento que se recibió la solicitud de información con número de folio 31057342400261, que a la letra señala:

“En relación a la respuesta remitida con motivo de la solicitud marcada con el folio 310573424000230, solicito del listado remitido en los oficios 8157/2024 y 8423, de los juzgados primero y segundo de control del primer distrito judicial, la siguiente información: El nombre completo de cada uno de los jueces de control, que registró, inició, conoció o concluyó cada uno de los procesos listados en dicha respuesta.”

Le informo que no es posible proporcionar el nombre de cada uno de los jueces de control, que registró, conoció o concluyó cada uno de los procesos listados en la respuesta proporcionada en el folio 31057342400230, esto de conformidad con lo previsto en la fracción V del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 23 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, ya que proporcionar dicha información a personas no relacionadas con los expedientes o causas penales, podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas jueces quienes son los encargados de resolver y dictar las sentencias correspondientes.

JUZGADO PRIMERO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO.

Es importante señalar que los jueces de los Juzgados Primero y Segundo de Control del Primer distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se encargan de realizar funciones de seguridad pública tales como resolver todos los procesos en materia penal, sobre hechos que son considerados delitos de conformidad con el Código Penal del Estado de Yucatán, así como de procesos relacionados con los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, por lo que proporcionar el dato relativo a su nombre a personas ajenas (que no son partes intervinientes) a dichos procesos pondría en riesgo sus vidas, seguridad o salud, pues al hacer públicos dichos datos no solamente atentaría contra la integridad física de los servidores públicos, si no que se pondría en riesgo también la vida de sus familiares, vulnerando con ello su seguridad e integridad personal; esto derivado de que al hacer pública la información relativa a los nombres y apellidos de las personas jueces, en conjunto con el cargo y adscripción general, se facilita su localización y la posibilidad de repercusiones por parte de gente mal intencionada o delincuentes, que pretendan menoscabar la salud o la vida de los servidores públicos.

En base a lo anterior es pertinente clasificar la información como reservada, no sin antes realizar la argumentación fundada y motivada la cual estará encaminada a acreditar que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla; es decir, es necesario aplicar la prueba de daño.

Prueba de daño.

Bajo este contexto, y en adición a lo anterior, debe mencionarse que de conformidad con lo establecido en los artículos 104, 105 y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con la condición Trigésimo tercero de los Lineamientos Generales, se colige la siguiente

**JUZGADO PRIMERO DE CONTROL DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO.**

prueba de daño y de interés público, que demuestra que la difusión de la presente información representa un riesgo real, riesgo demostrable y riesgo identificable, que se causaría con la difusión de los nombres y apellidos de las personas jueces lo cual se argumenta conforme lo siguiente:

RIESGO REAL:

Con la divulgación de los nombres y apellidos de las personas jueces, se pondría en riesgo la vida, seguridad o salud de los servidores públicos antes citados, debido a la estrecha relación que existe entre sus cargos y sus funciones dentro del sistema de seguridad pública del Estado; hacer públicos dichos datos, no solamente atentaría contra la integridad física de los servidores públicos, si no que se pondría en riesgo también la vida de sus familiares, vulnerando con ello su seguridad e integridad personal, facilitando su localización lo que incrementaría la posibilidad de repercusiones por parte de gente mal intencionada o delincuentes.

RIESGO DEMOSTRABLE:

Se estaría contraviniendo lo que expresamente establecen los artículos 3 y 10 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública que señala que la seguridad pública tiene por objeto proteger los derechos, la integridad física, el patrimonio y el entorno de las personas y preservar y restablecer la paz y el orden público, a través de la sanción de las faltas administrativas y la reinserción social, ya que al divulgar los nombres y apellidos de las personas jueces de los juzgados penales de control que realizan funciones dentro del sistema de seguridad pública del Estado, existe la posibilidad de que la difusión de dicha información los ponga como posibles blancos de extorsiones, amenazas o sobornos, lo que constituiría un grave riesgo para la seguridad del Estado, ya que impediría y obstruiría las funciones que ejerce el Poder Judicial durante la etapa de juicio, lo cual contribuiría en crear un estado de incertidumbre, inseguridad y falta de confianza de la ciudadanía para con las instituciones de gobierno.

**JUZGADO PRIMERO DE CONTROL DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO.**

RIESGO IDENTIFICABLE:

De hacerse públicos los nombres y apellidos de las personas jueces de los juzgados penales de control que realizan funciones dentro del sistema de seguridad pública del Estado, se estaría afectando el interés general en la procuración de justicia a favor de la sociedad, lo que supera el interés particular de conocer la información.

Por motivo de lo anterior, y en cumplimiento a lo manifestado en el artículo 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información pública, solicito convoque a los miembros del Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura a sesionar para confirmar, modificar o revocar la respuesta sugerida.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar al presente, quedo en espera de cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
EL C. ADMINISTRADOR DEL JUZGADO PRIMERO DE CONTROL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
ACUSATORIO Y ORAL.

MAESTRO EN DERECHO VICTOR MANUEL SANDOVAL AYUSO



**JUZGADO PRIMERO
DE CONTROL
DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL**



**JUZGADO SEGUNDO DE CONTROL DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO.**



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE YUCATÁN
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Mérida, Yucatán a 11 de octubre de 2024.

OFICIO: 9267/2024.

ASUNTO: SE RINDE INFORMACIÓN.

**A LA C.
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO.
LICDA. ENNA DEL SOCORO AMAYA MARTÍNEZ.
PRESENTE.**

En atención al oficio **UTAI-CJ-726/2024**, de 18 de septiembre de 2024, mediante el cual hace del conocimiento que se recibió la solicitud de información con número de folio 31057342400261, que a la letra señala:

“En relación a la respuesta remitida con motivo de la solicitud marcada con el folio 310573424000230, solicito del listado remitido en los oficios 8157/2024 y 8423, de los juzgados primero y segundo de control del primer distrito judicial, la siguiente información: El nombre completo de cada uno de los jueces de control, que registró, inició, conoció o concluyó cada uno de los procesos listados en dicha respuesta.”

Le informo que no es posible proporcionar el nombre de cada uno de los jueces de control, que registró, conoció o concluyó cada uno de los procesos listados en la respuesta proporcionada en el folio 31057342400230, esto de conformidad con lo previsto en la fracción V del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 23 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, ya que proporcionar dicha información a personas no relacionadas con los expedientes o causas penales, podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de los jueces, quienes son los encargados de resolver y dictar las sentencias correspondientes.

JUZGADO SEGUNDO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO.

Es importante señalar que los jueces de los Juzgados Primero y Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se encargan de realizar funciones de seguridad pública, tales como resolver todos los procesos en materia penal, sobre hechos que son considerados delitos de conformidad con el Código Penal del Estado de Yucatán; así como de procesos relacionados con los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, por lo que proporcionar el nombre del juez a personas ajenas, esto es, a alguna persona distinta de los que son partes intervinientes en los procesos pondría en riesgo la vida, seguridad o salud del servidor judicial, pues al hacer públicos dichos datos no solamente atentaría contra la integridad física de aquellos, si no que se pondría en riesgo también la vida de sus familiares, vulnerando con ello su seguridad e integridad personal; esto derivado que al hacer pública la información relativa a los nombres y apellidos de los jueces, en conjunto con el cargo y adscripción general, se facilita su localización y la posibilidad de repercusiones por parte de gente mal intencionada o delincuentes, que pretendan menoscabar la salud o la vida de los servidores públicos.

En base a lo anterior es pertinente clasificar la información como reservada, no sin antes realizar la argumentación fundada y motivada la cual estará encaminada a acreditar que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla; es decir, es necesario aplicar la prueba de daño.

PRUEBA DE DAÑO.

Bajo este contexto, y en adición a lo anterior, debe mencionarse que de conformidad con lo establecido en los artículos 104, 105 y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con la condición trigésimo tercero de los Lineamientos Generales, se colige la siguiente prueba de daño y de interés público, que demuestra que la difusión de la presente información representa un riesgo real, riesgo demostrable y riesgo identificable, que

**JUZGADO SEGUNDO DE CONTROL DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO.**

se causaría con la difusión de los nombres y apellidos de las personas jueces lo cual se argumenta conforme lo siguiente:

RIESGO REAL:

Con la divulgación de los nombres y apellidos de las personas jueces, se pondría en riesgo la vida, seguridad o salud de los servidores públicos antes citados, debido a la estrecha relación que existe entre sus cargos y sus funciones dentro del sistema de seguridad pública del Estado; hacer públicos dichos datos, no solamente atentaría contra la integridad física de los servidores públicos, si no que se pondría en riesgo también la vida de sus familiares, vulnerando con ello su seguridad e integridad personal, facilitando su localización lo que incrementaría la posibilidad de repercusiones por parte de gente mal intencionada o delincuentes.

RIESGO DEMOSTRABLE:

Se estaría contraviniendo lo que expresamente establecen los artículos 3 y 10 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública que señala que la seguridad pública tiene por objeto proteger los derechos, la integridad física, el patrimonio y el entorno de las personas y preservar y restablecer la paz y el orden público, a través de la sanción de las faltas administrativas y la reinserción social, ya que al divulgar los nombres y apellidos de las personas jueces de los juzgados penales de control que realizan funciones dentro del sistema de seguridad pública del Estado, existe la posibilidad de que la difusión de dicha información los ponga como posibles blancos de extorsiones, amenazas o sobornos, lo que constituiría un grave riesgo para la seguridad del Estado, ya que impediría y obstruiría las funciones que ejerce el Poder Judicial durante la etapa de juicio, lo cual contribuiría en crear un estado de incertidumbre, inseguridad y falta de confianza de la ciudadanía para con las instituciones de gobierno.

RIESGO IDENTIFICABLE:

De hacerse públicos los nombres y apellidos de las personas jueces de los juzgados penales de control que realizan funciones dentro del sistema de seguridad

**JUZGADO SEGUNDO DE CONTROL DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO.**

pública del Estado, se estaría afectando el interés general en la procuración de justicia a favor de la sociedad, lo que supera el interés particular de conocer la información.

Por motivo de lo anterior, y en cumplimiento a lo manifestado en el artículo 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información pública, solicito convoque a los miembros del Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura a sesionar para confirmar, modificar o revocar la respuesta sugerida.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar al presente, quedo en espera de cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
LA C. ADMINISTRADORA DEL JUZGADO SEGUNDO DE CONTROL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
ACUSATORIO Y ORAL

LICENCIADA EN DERECHO MARIEL HEREDIA TORAYA



**JUZGADO SEGUNDO
DE CONTROL
DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL**

